

45ª. reunión - Continuación de la 32ª. sesión ordinaria - Septiembre 27 de 1920

PRESIDENCIA DEL Dr. D. BENITO VILLANUEVA

Senadores presentes: Caballero Ricardo, Castañeda Vega Francisco, Del Valle Iberlucea Enrique, Esteves Manuel I., Gallo Vicente C., García Luis, Garro Pedro A., Iturbe Pedro, Linares Luis, Llanos Pedro, Luna David, Melo Leopoldo, Roca Julio A., Saguier Fernando, Soto Pedro Numa, Torino Martín M., Vidal Juan R., Villanueva Benito, Zabala Carlos

Senadores ausentes con aviso: Albarracín Martín, González Joaquín V., Iturraspe Ignacio de, Patrón Costas Robustiano.

SUMARIO

2

- 1.—Asuntos entrados.
- 2.—Moción de sesión permanente rechazada.
- 3.—Jubilación de empleados y obreros de empresas de servicios públicos.

—En Buenos Aires a 27 de septiembre de 1920, siendo las 16, dice el

Señor Presidente (Villanueva). — Continúa la sesión con 16 señores senadores presentes. Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

—Se lee:

1

ASUNTOS ENTRADOS

Solicitan pensión civil.—

Agueda Palacios de Labelle y Florinda E. de Sosa.

—A la Comisión de Peticiones.

Despachos de Comisiones.—

La de Guerra en las solicitudes de pensión de Can delaria y Ciriaca Castellanos, Rosario Reyes de Tezanos Pinto, y Fidela Ruiz Huidobro de Ballesteros.

—A la Orden del Día.

Sr. Presidente (Villanueva). — Corresponde continuar la discusión, en particular, del despacho de la Comisión de Legislación sobre jubilación de empleados y obreros de empresas particulares que prestan servicios públicos.

SE RECHAZA UNA MOCION PARA CONSTITUIRSE LA CAMARA EN SESION PERMANENTE

Sr. del Valle Iberlucea. — Pido la palabra.

Antes de continuar con esta orden del día, deseo hacer una indicación. El H. Senado resolvió en una de sus últimas reuniones, fijar la sesión de hoy para tratar el despacho de la comisión de códigos sobre el proyecto de Código Penal. Es un asunto de suma importancia y trascendencia, que está a consideración de la H. Cámara desde hace 14 años. La reforma penal es reclamada con urgencia en todos los círculos intelectuales que se ocupan de la legislación penal en nuestra República.

Me parece que, una vez despachado este proyecto sobre jubilaciones de obreros y empleados de empresas de servicios públicos, correspondería que el H. Senado se constituya en sesión permanente hasta terminar con la consideración del proyecto sobre Código Penal.

Hago indicación en ese sentido.

Sr. Presidente (Villanueva). — Está en discusión la moción del señor senador, a fin de que el H. Senado se constituya en sesión permanente hasta terminar la consideración del proyecto sobre Código Penal.

Sr. Esteves. — Yo acompañaría al Sr. Senador, si modificara su indicación en el sentido de que no nos haga trasnochar a los viejos. *(Risas).*

Sr. del Valle Iberlucea. — Reunirse en sesión permanente no significa sesionar hasta al-

tas horas, sino que el H. Senado no ha de tratar otro asunto, hasta que no se termine el que motiva la sesión permanente. En este caso, el H. Senado puede pasar a cuarto intermedio hasta mañana, y seguir tratando el proyecto de Código Penal.

Sr. Presidente (Villanueva). — Se va a votar la moción del señor senador.

—Se vota y resulta negativa.

3

JUBILACION DE EMPLEADOS Y OBREROS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

Sr. Presidente (Villanueva). — Está en discusión el artículo primero del proyecto sobre jubilación de empleados y obreros de empresas particulares de servicios públicos.

Sr. Torino. — Pido la palabra.

Voy a hacer indicación, en atención a los breves días que faltan para terminar el presente período ordinario de sesiones, para que todos los asuntos que en estos días trate esta H. Cámara, inmediatamente que las sanciones se vayan produciendo, antes de levantarse la sesión, se comuniquen a la otra Cámara.

Sr. Presidente (Villanueva). — Está en discusión la moción del señor senador por Entre Ríos.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Villanueva). — Está en discusión el Art. 1°. del despacho de la Comisión de Legislación.

Si el H. Senado no tiene inconveniente, y en atención a que la orden del día hace muchos días que ha sido repartida, se podría leer el número de los artículos, y los señores senadores que tuvieran observaciones que hacer, deducirlas en el artículo respectivo, aprobándose los que no sean observados.

Como parece que hay asentimiento, así se hará.

—Se votan y aprueban, sin observación, los artículos 1o., 2o., y al leerse el artículo 3o. dice el

Sr. Gallo. — En el artículo 3°. habría que hacer un pequeño agregado. Dice que se comprende a los médicos de sociedades de socorros reconocidas y dependientes de las empresas, y habría que agregar: “a los médicos y empleados”.

—Se aprueba el artículo 3o. con el agregado del señor senador Gallo, y sin modificación el 4o. y el 5o.

—Se lee el artículo 6o.

Sr. Linares. — Pido la palabra.

Yo propondría la alteración del orden de los artículos en esta parte. Que tome la colocación del artículo 6°. el artículo 11°, donde se establecen los fondos y los aportes que han de formar la Caja de Jubilaciones y Pensiones, porque me parece que ese es el orden lógico que debe tener el articulado, desde que primero deben votarse los fondos con que ha de contar la Caja y después acordarse los beneficios, en la medida de los fondos votados.

Tengo, con respecto a este artículo, algunas observaciones de carácter fundamental que me voy a permitir formular.

Sr. Gallo. — No debe ser el artículo 11°. al que se refiere el señor senador, sino al 35°.

Sr. Llanos. — Es el artículo 35°.

Sr. Linares. — Si se sancionara el artículo 6°. antes, partiríamos de una situación hecha y, entonces, los fondos tendrían que acomodarse a los beneficios; me parece más razonable el votar los fondos primero, es decir, saber con qué fondos se va a contar, para, de acuerdo con ello, acordar los beneficios.

Es una observación que hago anticipándome a las observaciones que haré cuando se trate el artículo 35°.

Sr. Presidente (Villanueva). — La comisión acepta?

Sr. Gallo. — La alteración de todo el orden, traería inconvenientes en la práctica por la correlación y las referencias que hay en las diferentes disposiciones del articulado de este proyecto.

Lo que podría hacerse es tratar primero el capítulo 4°. y dejar subsistente el orden del proyecto para su consideración posterior.

Sr. Linares. — Si así se aceptara, por mi parte, estoy conforme.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Villanueva). — Habiendo asentimiento, se dejará pendiente el capítulo 2°. y 3°. y pasaremos a tratar el capítulo 4°.

Capítulo 4°, fondos de la Caja, artículo 35°.

Sr. Linares. — Tratándose de determinar los aportes que han de formar el activo o los recursos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de esta ley, he creído conveniente salvar una vez más las ideas que tuve oportunidad de expresar ante este cuerpo con motivo de la jubi-

Veo que la comisión ha seguido en este caso el mismo plan de financiación de la ley a que la ley de los empleados y obreros ferroviarios.

me he referido. Se votan los mismos recursos para responder a iguales obligaciones; quiero decir, que se establece por parte de los obreros y de los empleados de las empresas comprendidas aportes equivalentes para sufragar las erogaciones que requieren los beneficios que el proyecto acuerda, apreciados con el mismo criterio y otorgados con la misma medida que en aquella ley, siempre agregando la responsabilidad subsidiaria e ilimitada del estado para el caso de falla de los fondos de la Caja.

Cuando se trató la ley de jubilaciones de los ferroviarios, yo hice algunas observaciones a este respecto, y tengo la convicción de que, a la luz de los informes que se produjeron por dos comisiones técnicas y muy respetables nombradas para estudiar aquel proyecto de ley, que estaba concebido más o menos en los mismos términos, demostré que se establecía la caja con evidente insuficiencia de fondos, lo que afectaba hondamente su estabilidad.

Recuerdo que la comisión de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Exactas de la Capital establecía que, para que los aportes de la Caja fueran suficientes para responder a las obligaciones que se proyectaban, era necesario que ellos representaran, por lo menos, del 20 al 23 % del valor de los sueldos de los empleados y obreros comprendidos en los beneficios de la ley. Según la apreciación que hacía esta autorizada comisión, los aportes de ese proyecto podían evaluarse en un 15 %. Llegaba a la conclusión de que, o había que reducir los beneficios, o que aumentar los aportes, y agregaba que si se tratara de reducir los beneficios para armonizarlos con los aportes para conseguir dar equilibrio a la ley, había que aumentar los años de servicio y la edad de los beneficiarios a un mínimo de 35 y 55, respectivamente, para la jubilación ordinaria. Además debía establecerse un máximo de beneficio para la jubilación, que, en el mejor de los casos, no podía pasar de un 70 % del sueldo del agraciado. Agregaba con este criterio básico debían otorgarse los demás beneficios en el proyecto.

Y bien, en este caso, señor presidente, los recursos no pueden apreciarse, en más de un 15 o/o del sueldo de los empleados comprendidos en sus disposiciones; por una parte tenemos el 5 % que deben aportar los empleados como cuota de contribución, el 8 % las empresas, y por otra hay algunos recursos eventuales unos y de poca significación otros, semejantes o análogos a los que están consignados en la ley de jubilaciones ferroviarias, que, por la misma comisión técnica fueron tasados en un 2 %; de manera que lo que da esta ley como recurso es el 15 %. Quedaría un vacío muy

grande del 5 % al 8 %, que debe ser llenado por el Tesoro. ¿Cuánto representa este 5 al 8 %? No se sabe, no puede saberse tampoco. En el caso de los ferroviarios, la misma comisión técnica lo avaluaba, más o menos, en diez millones de pesos, una vez que la Caja entrara en situación normal, es decir después de transcurrido un número de años suficiente para que la ley tuviera todo su desarrollo. En este caso no puede calcularse siquiera el déficit, porque viene el proyecto sin el estudio de una comisión técnica, que, a base de una investigación seria y honda, a base del conocimiento del número del personal que comprende y del monto de los sueldos, pueda decirnos con la aproximación que humanamente es posible en cuantos millones fallará la caja anualmente.

Lo cierto es que, por las luces que nos arrojan los antecedentes y estudios del proyecto a que antes me he referido, puede decirse que esta ley ha de venir a incidir en el presupuesto de la nación con saldos muy fuertes, después de unos quince o veinte años, y estos saldos, irán a reunirse con los que arrojará la ley de jubilaciones ferroviarias y la de pensiones civiles y militares, que ya está en bancarrota galopante, según se desprende de estudios serios hechos por el señor diputado Echagüe, en los que se establece que para el año 1940 será necesario que en los presupuestos anuales se voten sesenta millones de pesos para saldar sus déficits.

Yo creo, señor presidente, que se está abriendo una puerta muy peligrosa que nos puede conducir por caminos extraviados, con esto de comprometer a ciegas la responsabilidad subsidiaria o ilimitada del estado en leyes de jubilaciones de empleados y obreros de empresas particulares. Después vendrán los empleados de otras empresas, como las navieras y de los puertos, que tienen por lo menos iguales títulos; vendrán acaso otros obreros como los mozos de hoteles, confiterías, chauffeurs y cocheros y todos, en fin, los que prestan servicios públicos, invocando sus títulos más o menos discutibles, para pedir este beneficio. El estado se verá en el caso, compelido por la corriente en que se embarca, de dictar leyes sucesivas de jubilaciones y pensiones, las que luego producirán déficits con incidencia en el Tesoro, que, al cabo de algún tiempo, harán sumas elevadísimas, pavorosas, si se quiere, para nuestras finanzas.

Cuando se discutió la ley de jubilaciones ferroviarias, el miembro informante de la comisión, señor senador Roca, para justificar esta responsabilidad que se asignaba al estado en una forma ilimitada, decía, que los empleados ferroviarios constituían un gremio especial,

bien caracterizado, distinto de todos los demás, aún de los de empresas que prestan análogos servicios, porque los de aquellos tienen una íntima relación con el desarrollo, crecimiento y prosperidad económica y social del país y aun con su tranquilidad, y decía que en Francia habían sido considerados como corporaciones semi-oficiales, para otorgarles estos beneficios. Se ponía en el caso de que se presentaran otros obreros de empresas particulares, como de tranvías, de otros transportes terrestres y aun de navegación, que prestan servicios análogos, y declaraba que no podían entrar en esta categoría, ni reclamar iguales beneficios.

Me parece, señor presidente, que fueron esas consideraciones, expuestas con la elocuencia con que sabe hacerlo el señor senador Roca, las que decidieron al H. Senado a aceptar esta forma nueva, o más bien novedosa, de financiar la Caja de Jubilaciones y pensiones de empleados de empresas particulares. Ahora se pretende extender estos extraordinarios beneficios a los demás empleados y obreros de empresas privadas que prestan servicios públicos, haciendo de la excepción, la regla.

Me alarma, señor presidente, esta manera de legislar; debo decirlo con franqueza. No sabemos a donde vamos. No sabemos hasta donde comprometemos el futuro. Nos contentamos, mirando las cosas con un criterio circunstancial, con que estas leyes no tengan incidencias en el Presupuesto hasta dentro de 15 o 20 años. Pero si 15 o 20 años son 15 o 20 segundos en la vida de la Nación!

Pienso, señor presidente, que si hemos de seguir el camino ya iniciado, de dar estas leyes de jubilaciones y pensiones por tandas o por entregas, sin abarcar la cuestión obrera en su conjunto, que sería lo lógico, y si hemos de seguir comprometiendo la responsabilidad del Estado, — lo que yo no estoy lejos de aceptar, porque creo que el Estado debe contribuir también a la vida de estas leyes de asistencia social, — creo que debe fijarse y precisarse de antemano su cuota, para evitar en el futuro sorpresas desconcertantes y graves trastornos.

Es por estas razones, señor presidente, que yo no estoy conforme con la manera de financiar los recursos de la Caja y voy a votar en contra del artículo 35°, tal como lo ha propuesto la comisión, y más bien propondría la substitución de la garantía subsidiaria del Estado, por una cuota fija que represente el tanto por ciento del sueldo mensual, que sería más o menos fácil, tal vez, establecerla en su monto con los datos que debe tener la comisión.

De esta manera tendríamos recursos seguros y conocidos formando la Caja, y en relación

con su monto se darían los beneficios y no en la medida de las solicitudes apremiantes de los gremios interesados que vienen a golpear las puertas del Congreso.

Con ello dejo fundada mi oposición.

Sr. Esteves. — Pido la palabra.

Dentro del orden de ideas que acaba de manifestar el señor senador por Salta, me parece que el punto a que él hace referencia, está en otro capítulo, porque precisamente al referirse a los fondos de la caja, no dice que el Estado ha de contribuir a formarla...

Sr. Linares. — Es cierto, señor senador.

Sr. Esteves. — Es en el capítulo sobre la administración de la Caja, en el artículo 44°, donde aparece la garantía subsidiaria del Estado y donde dice que dispondrá el directorio de la percepción e inversión de los fondos de la Caja, fiscalizando a las empresas en lo pertinente, y anualmente fijará su presupuesto de gastos y el del monto de las jubilaciones y pensiones, que deberán ser satisfechos durante el año con los fondos de la Caja, todo lo que se someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional. Cuando los recursos calculados no alcanzasen a cubrir el importe total de las jubilaciones y pensiones que deberán ser satisfechas durante el año, la Nación contribuirá con la diferencia.

Yo decía, que esto es una ley de ensayo.

La ley general de jubilaciones y pensiones tiene el aporte de los empleados nuevos, de los que renuncian, y en fin una cantidad de recursos y fondos provenientes por distintos conceptos, y sin embargo, se sabe que esa Caja está cada día más en déficit hasta producirse la quiebra.

Los cálculos hechos por una persona competente, respecto de los aportes de un empleado, que empezará ganando \$ 50, y cada cinco años aumentará \$ 50, hasta llegar a \$ 250, después de treinta años necesitaría, para percibir la jubilación tal como le corresponde, de acuerdo a los cálculos hechos, haber contribuido con el 19 %. Y sin embargo, la forma de contribución no alcanza a ese porcentaje.

Yo decía, por ejemplo, dispondrá de la percepción e inversión de fondos, y hará su presupuesto anual, no debiendo jamás exceder los gastos de sus recursos.

Así como se hace el servicio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, por las entradas que ella misma tenga, y las haya calculado, eliminando al Estado.

Es una ley de prueba de tres años; y se puede llegar a una conciliación en que se diga: el Poder Ejecutivo podrá contribuir normalmente con uno, dos, tres o cuatro millones; pero limitar la cantidad, para que se sepa hasta don-

de puede llegar, porque al fin y al cabo, como muy bien decía el señor senador por Salta, no sabemos cómo va a terminar esa ley ferroviaria y lo que va a producir.

Si el señor miembro informante de la Comisión, con su elocuencia y talento, pudiera ubicar esta modificación en el articulado de la ley, como una medida de conciliación, en ese artículo 44, que está en el capítulo 5° de la administración de la Caja, el problema se habría solucionado.

Por lo demás, respecto de las otras disposiciones de la ley, no tengo nada que observar.

Sr. Presidente (Villanueva). — ¿El señor senador por Salta no ha propuesto ninguna modificación?

Sr. Linares. — Proponía que se haga desaparecer la responsabilidad subsidiaria y limitada del Gobierno, y que se substituyese por una contribución; que el Estado diera un tanto por ciento sobre el sueldo de los empleados.

Yo propondría el 2 %.

Sr. Presidente (Villanueva). — El 2 %?

Sr. Linares. — ...que más o menos, representa, me parece, un valor de \$ 60.000 al año, en relación al monto de los sueldos que ha enunciado el señor miembro informante de la comisión. Esto podría ser materia de un estudio posterior.

Sr. Presidente (Villanueva). — La comisión acepta la modificación?

Sr. Gallo. — En el informe general sobre este asunto, tuve oportunidad de recordar que la comisión había procurado ajustar su despacho a los términos de la ley de jubilación ferroviaria por un doble motivo; primero, porque creía que no convenía establecer soluciones diferentes para casos o situaciones idénticas, so pena de suscitar dificultades, emulaciones, rivalidades entre los gremios, lo que podría, a su turno, ocasionar inconvenientes de otra índole.

El segundo motivo era el derivado de que todas las cuestiones, que planteaba la consideración de esta ley, habían sido ya estudiadas y resueltas en el amplio debate, a que, especialmente, en esta Cámara dió lugar el estudio de la ley de los ferroviarios.

Recordaré también que, en esa oportunidad, entre los señores senadores que se habían destacado por su intervención en el debate, estaba el señor senador por Salta, doctor Linares, quien reveló en aquella emergencia una respetable preocupación con miras al futuro, contemplando los compromisos y las cargas que para el tesoro de la Nación podría representar, en el transcurso del tiempo, la aplicación de esta ley, supuesto un desequilibrio entre los ingresos con que había de constituirse el tesoro de la Caja y los gastos y desembolsos que la misma Caja había de tener, por concepto de

jubilaciones y de pensiones, a estar a la información técnica producida por dos comisiones de carácter distinto, sobre la base de un censo de los empleados ferroviarios, realizado en ejecución de una ley especial.

En el caso presente, ese censo de todos los empleados, con determinación específica de sus edades, años de servicios y sueldo no existe, porque no ha habido la ley previa que dispusiera su levantamiento. Por eso se establece en el articulado de este proyecto la obligación de hacer ese censo completo. En el curso de aquel debate pudo sin embargo ponerse de manifiesto que, a pesar de la autoridad con que venían revestidos aquellos informes técnicos, en realidad ellos, como todos sus similares, frente a situaciones de esta índole, eran necesariamente conjeturales, reposando sobre bases hipotéticas y expuestos en definitiva a la rectificación o conformación posterior por la realidad de los hechos, imposibles de preveer con certeza. En casi todos los casos en que se ha tratado, no sólo en nuestro país sino en el extranjero, de estas leyes de pensión y jubilación, como de las tablas que sirven de base para los seguros, se ha comprobado el mismo hecho: a pesar de la exactitud de las cifras que les han servido de base, a pesar de la autoridad de los técnicos, y sin mengua de ella, la realidad de los hechos, con el tiempo, ha rectificado frecuentemente las previsiones formuladas.

Es así, señor presidente, cómo, a pesar de aquellos informes, el H. Senado consagró la solución que este proyecto de ley trae reproducida a la consideración del H. Senado, apartándose, en nombre también de altas consideraciones públicas, de las conclusiones a que estos informes arriban en cuanto a la edad y los años de servicios que debían requerirse para la jubilación, — dos requisitos que necesariamente hay que tener en cuenta, cuando se trata de formar un criterio de apreciación en esta materia, vinculándolos al factor económico-financiero.

La Comisión, como el señor senador por Salta lo ha recordado, ha organizado un sistema de recursos, más o menos, idéntico al que la ley de jubilación ferroviaria ha creado, para desenvolverse en condiciones de aplicación también casi idénticas. De tal manera que las previsiones tienen que ser más o menos iguales en uno y otro caso.

La garantía subsidiaria ha sido proyectada por la comisión en la imposibilidad momentánea de fijar una suma suficientemente vinculada a la capacidad financiera de la Nación, dentro de su deber de contribuir con un concepto de previsión más, que como una seguridad destinada a hacerse inexcusable e ilimitada.

mente efectiva en alguna hora del desenvolvimiento de la Caja, cualquiera sea la carga que represente y la situación del tesoro público.

En realidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál ha de ser la situación de equilibrio o desequilibrio entre los aportes y las salidas? No podría formularse una afirmación categórica en ningún sentido; ni sería permitido enunciarla sin caer en la hipótesis o la conjetura, sino una vez que se realicen por la Caja los dos estudios que están mandados practicar por los artículos 59 y 60 del proyecto, y con conocimiento de las entradas efectivas que en el transcurso de tres años debe tener la institución.

Es, en efecto, oportuno recordar que la ley va a tener efecto, para otorgar jubilaciones y pensiones, recién dentro de tres años, en cuya oportunidad, según los cálculos de la comisión, la Caja tendrá un capital aproximado de quince millones de pesos, contando con que se hagan los aportes de las empresas y de los empleados en una forma normal, y sobre la base, también, de que el personal empleado sea, en número, el mismo que actualmente tiene, aún cuando todo induce a presumir que él ha de aumentar en razón de la ampliación de los servicios.

La garantía del Estado, la comisión la proyecta teniendo en cuenta que se trata de una jubilación de empleados de empresas particulares, que prestan servicios públicos, servicios públicos bien caracterizados, necesarios, esenciales, en unos casos, para la vida, en otros casos, para la salud, en otros para la actividad comercial y hasta para la comodidad, dado el grado de civilización que hemos alcanzado, servicios que existen en todas las ciudades modernas y cultas, y que, desconocidos en otrora, hoy son ya, en su casi totalidad, indispensables.

No sería posible asimilar esta categoría de empleados de empresas particulares concesionarias de servicios públicos con otros empleados y trabajadores vinculados exclusivamente a las actividades individuales con un interés de lucro meramente privado. Ellos tienen otra situación que no determinaría, en igualdad de condiciones, el mismo título o derecho a la garantía subsidiaria del Estado. Por lo demás, ha de tenerse en cuenta esta circunstancia: casi todos estos servicios públicos atendidos en la actualidad por empresas particulares, en virtud de concesiones del Estado, tienden en el mundo entero a reintegrarse a la gestión oficial, a cargo de los poderes públicos. La municipalización, como se llama, de los servicios públicos, es una tendencia uniforme en la legislación de todos los países; lo que es hoy materia de la actividad industrial privada, objeto de una explotación de las empresas particulares

se transforma en una gestión oficial a cargo de los poderes públicos, bajo el control de éstos. Sus resultados son discutidos, las argumentaciones en favor de uno y otro sistema, son a base de estadísticas igualmente contradictorias, pero el hecho es ese; esa es la realidad: se va en ese camino y nada sería extraño, dentro de una previsión normal en el desenvolvimiento del derecho público, que muchos de estos servicios que hoy están a cargo de empresas privadas comprendidas en los enumerados de esta ley, mañana sean servicios públicos, y que estos empleados, que hoy son empleados de empresas particulares, sean mañana funcionarios del Estado, para los cuales éste tendrá las mismas obligaciones e igual autoridad que las que ejerce con relación al resto de los funcionarios públicos de la Administración.

Pero la comisión toma en cuenta las observaciones hechas por el señor senador por Salta y que ha acentuado el señor senador por Tucumán, dentro del mismo orden de ideas, y no tendría inconveniente en aceptar una solución que consulte las diferentes opiniones emitidas y que permita a los señores senadores votar esta ley con más amplitud de espíritu y sin comprometer una de las bases de su vida estable y segura en interés de todos los derechos que contempla.

La comisión aceptaría que en el artículo 35°, y como un inciso nuevo, se estableciera una disposición que dijese más o menos esto: "Con la suma que anualmente se establezca como aporte del Estado y que se fijará una vez realzado el censo a que se refiere el artículo 59°."

Recuerdo de nuevo, que por ese artículo se dispone el levantamiento de un censo prolijo, cuyos resultados la Caja hará conocer al Congreso por intermedio del Poder Ejecutivo. Con el conocimiento completo de este estudio, con los informes mismos de la Caja, con la experiencia acumulada en los tres años de vigencia que habrá tenido la ley, se estaría habilitado, para prever si efectivamente habrá un desequilibrio, en el futuro y, para determinar el monto de ese desequilibrio y el *quantum* del aporte de la Nación.

Ese artículo contempla también la previsión enunciada en su hora por el señor senador por Córdoba, doctor Roca, informando el proyecto de ley de jubilaciones ferroviarias, cuando estableció con exactitud que, como consecuencia de la experiencia que se haga de la aplicación práctica de la ley, surgirá la demostración de si es o no necesario introducir alguna modificación, y en que sentido, modificación que sería siempre en interés del mismo personal de empleados y de obreros, modificación que, contemplando el propósito de asegurar la estabili-

dad de la Caja, estoy seguro de que sería aceptada sin inconvenientes y acaso gestionada por los mismos interesados.

Esto que se ha llamado tan frecuentemente falta de previsión del obrero, del empleado, refiriéndose a la falta de formación de un fondo propio de reserva para el futuro, para cuando se debilitan sus fuerzas para el trabajo, o para cuando se produce la muerte y se deja a la familia en el desamparo, yo no creo que sea, precisamente, una falta de previsión, sino el resultado de la imposibilidad material en que se ha encontrado ante la exigüidad de los sueldos, y el apremio de las necesidades materiales crecientes de todos los días, de hacer por el ahorro un fondo de reserva para el futuro.

Partiendo de esta base, estoy convencido de que los obreros, y todos los empleados comprendidos en las disposiciones de esta ley, ante la inseguridad del recibo de la jubilación o de la pensión para su familia, preferirían, llegado el caso, que se modificaran algunas de las disposiciones que fijan las condiciones de las jubilaciones y pensiones, para poder tener esa seguridad, alejando todo peligro o incertidumbre.

De manera que, y concretando estas consideraciones, digo en nombre de la comisión que con las reservas que dejo hechas, ella aceptaría la inclusión de ese inciso, que en cierto modo limita la responsabilidad del Estado, refiriéndola a la fijación que ha de hacerse de ese aporte a la Caja de jubilaciones, en la estación oportuna y con todos los elementos necesarios para graduarla con justicia.

Nada más. (*Muy bien*).

Sr. Esteves. — ¿Y el final del artículo 44, vendría a hacer referencia al inciso 1)?

Sr. Gallo. — Sí, señor senador.

Sr. Linares. — Pido la palabra.

Yo estoy en parte conforme con las ideas que, en una forma tan clara y precisa, ha expuesto el señor senador por la Capital, doctor Gallo; pero no coincide con las conclusiones a que ha llegado; y, en parte, tampoco estoy conforme con algunas de sus consideraciones.

Refiriéndome a la última parte, que es la principal de su exposición, debo manifestar que, al decir la ley que después de tres años, cuando se haga el censo, el presupuesto ha de fijar la partida correspondiente para integrar los aportes de la Caja, a mi modo de ver y con esa sola indicación, se compromete, desde ya, la responsabilidad ilimitada del Estado, y es eso, precisamente, lo que yo no acepto. Más bien una vez que se haya hecho el estudio actuarial de la ley y el censo, se verá si los aportes son suficientes para mantener las finanzas de la Caja y darle estabilidad, en la medida de los beneficios proyectados, y entonces sería la oportunidad de fijarlos como definitivos.

Por este proyecto se van a acordar beneficios en una medida que sobrepasa los recursos de la Caja; y ya acordados, por más que por el estudio que se haga del desarrollo de la ley, se viera que aquellos exceden a los recursos de la Caja, será muy grave, difícil, quizá imposible, su reducción al justo límite, porque se habrán creado situaciones particulares, con carácter casi de derechos adquiridos, a favor de los beneficiarios, que los inducirá a no aceptar jamás, por más consideraciones que se les haga, ninguna reducción, y exigirán que el Estado, pueda o no pueda, venga a llenar los déficits. Las situaciones de privilegio no se arrancan ni se reducen sino con la violencia.

La responsabilidad ilimitada establecida en la ley ferroviaria, fué como lo he recordado, por especiales consideraciones que se quiso acordar al gremio y a la naturaleza especial de los servicios que presta, que, como lo decía el miembro informante de la comisión, no se podía confundir con ningún otro gremio, aunque prestara servicios análogos, por cuanto estos servicios no podían ser de la trascendencia e importancia de aquellos, que tienen una relación directa e íntima con el desarrollo y el progreso del país y con la vida económica de la nación.

Cuando la comisión del honorable Senado entró a estudiar el proyecto de referencia que vino de la Cámara de Diputados, como recordarán los señores Senadores que me escuchan, contenía menores beneficios que el que se sancionó, porque establecía la edad de 55 años como minimum y 30 años de servicios; encontró, sin embargo, serios inconvenientes para financiarlo y por esta causa venía demorando su despacho, y me parece que fué por iniciativa del miembro informante, doctor Roca, que se llegó a esta nueva forma de financiación, como solución, estableciendo la responsabilidad ilimitada del Estado, y él dijo que la Comisión se había inspirado en el ejemplo de otras naciones, como Francia, que había adoptado el mismo sistema, a lo que yo, recuerdo, observé en la exposición que tuve oportunidad de hacer, que en Francia existían circunstancias muy especiales, que no mediaban en nuestro país para adoptar ese temperamento, y era que los ferrocarriles particulares estaban garantidos por el estado y que, hasta cierto punto, eran ferrocarriles oficiales, porque el estado tenía una participación además en las utilidades cuando estas excedían de determinado límite. De manera que el estado era el primer interesado en dar estabilidad, seguridad y firmeza a esos servicios; pero, debo reconocer que el honorable Senado se inclinó por la reforma que propuso el señor senador por Córdoba, por razones muy

atendibles, que me parece que, en este caso, no tienen razón de subsistir, por más que se trate de empresas que prestan servicios públicos.

Las jubilaciones de los empleados de estas empresas deben financiarse con los recursos de ellos mismos y de las empresas y con una contribución determinada del Estado. Con una contribución que de antemano sepamos, su monto y que ya entremos a servir, votando la partida correspondiente en el presupuesto.

El sistema que adopta el proyecto que está en consideración en cuanto al otorgamiento de los beneficios y a la aplicación de la ley, es el mismo de la ley ferroviaria, que demora tres años para comenzar a hacer efectiva la jubilación, que es el mismo intervalo que medió entre la ley básica que votaba recursos y la sanción definitiva de la ley orgánica existente, es decir, que durante ese lapso de tiempo ya se habían reunido recursos importantes formando un capital que redituaba intereses. Ese es el sistema que en todas partes del mundo se sigue para la formación de las cajas de jubilaciones y pensiones, y se llama de capitalización; sistema más previsor y económico que el de distribución; pero con la diferencia que en otros países se dejan correr 10 y 12 años los intereses, para formar el gran fondo que después de esos diez o doce años recién ha de empezar a sufragar las obligaciones emergentes de las jubilaciones que permanecen en suspenso mientras tanto.

Con el plazo establecido, no hemos mejorado la situación; es la misma situación de aquella ley, y esa ley de ferroviarios comporta un sistema caro, porque parte del plazo de tres años para que empiecen las erogaciones de la Caja; período relativamente muy corto para conseguir el robustecimiento del fondo de la Caja, por acumulaciones de intereses.

Ahora, la circunstancia de que en esta materia no puedan hacerse cálculos exactos, cálculos matemáticos, que estos sean siempre conjeturales, que las cifras son necesariamente de aproximación, eso con ser muy exacto, no lo es para que nos inclinemos a sancionar una ley sin un conocimiento serio y vasto de los efectos que pueda tener. Al contrario, es el caso de que nos prevngamos de los defectos de que pueden adolecer, porque puede suceder que los cálculos hechos por las comisiones técnicas, que es lo más serio que ha podido consultarse, resulten bajos todavía en un sentido fatalista, es decir, que más bien los resultados confirmen los vaticinios del actuario Burm, que es una autoridad en la materia, quien dijo que esa ley tendría un déficit enorme, que lo calculaba, me

parece, en 40 millones, cuando entrara en su régimen normal.

Lo que es innegable, sobre todo cuando se trata de esta clase de leyes como la que se discute, complicadas en su desarrollo, es que son los técnicos, son los hombres de ciencia, son los hombres que tienen los medios y los procedimientos para hacer investigaciones, los que están más capacitados para hacer su estudio y para dar su dictamen.

De manera que yo, en esa parte, no estoy conforme con el señor senador por la capital, a quien reconozco y me complace en decirlo, la más alta ilustración en esta materia. Creo que en este caso, como en todos los de igual naturaleza, el Senado debe proceder con toda precaución, con toda cautela, con mucha prudencia y especialmente con mucho estudio, para no cometer errores que pueden ser muy graves para lo futuro y que pueden traer perturbaciones enormes e irreparables en las finanzas del Estado.

No me ha de negar el señor senador que hay otros servicios públicos que tienen un carácter muy parecido a los que trata de beneficiar esta ley; por ejemplo, los servicios que prestan los empleados de los puertos, que son servicios públicos tan necesarios o más que estos; los servicios de los empleados de las compañías de navegación, que son servicios de comunicación regional o internacional indispensables y que no pueden compararse con los servicios de comunicación urbana, reducidos a un radio estrecho. Es así como pueden venir otros gremios invocando iguales o semejantes títulos.

Es preciso que este cuerpo sepa, al sancionar estas leyes, hasta dónde compromete la situación del tesoro y con ella su propia responsabilidad moral. Es por esto que insisto en que se haga desaparecer la responsabilidad ilimitada del Estado y se reemplace con un dos por ciento de los sueldos de los obreros.

Así estos sabrán los recursos con que cuenta la Caja y lo que puede ocurrir en el caso de fallar. En esta forma ellos se encontrarán más dispuestos a reducir sus beneficios en obsequio a la estabilidad de la Caja. Pero, si ellos creen de antemano que el Estado les ha asegurado una situación determinada, y creen haber adquirido legítimamente esa situación, no habrá quien los haga retroceder. Y eso traerá, señor presidente, graves consecuencias.

Es todo lo que tenía que decir.

Sr. Gallo. — Pido la palabra.

No participo del pesimismo tan acentuado en que inspira sus palabras el señor senador por Salta. Suponiendo que a base de una serie de leyes semejantes, la Nación haya de cargar con el saldo cuantioso procedente de las diversas

Cajas de Pensiones y Jubilaciones que se creen; no creo que ello demande al Estado un esfuerzo excesivo en relación a sus fuerzas.

No participo de ese pesimismo, porque, desde luego, no creo que estos desequilibrios se presenten o asumiendo las proporciones que el señor senador por Salta teme, para gravitar exclusivamente sobre el Estado, porque, al contrario de lo que piensa, soy, como lo decía hace un momento un convencido de que si se evidenciara una situación de desequilibrio entre los ingresos y las erogaciones de la Caja, de tal magnitud, que el aporte de la Nación para cubrir los saldos que produzca resultaran superiores o excesivos en relación a los recursos mismos de la Nación, o al monto a que razonablemente pudiera asignársele, habría que contar con la colaboración, con la concurrencia del mismo personal obrero, beneficiado con las ventajas, o con los derechos que le acuerda la ley de Jubilaciones y Pensiones, para consagrar las reformas indicadas como necesarias por la experiencia.

Lo he dicho, y lo repito ahora; yo creo que ante el peligro de no tener la seguridad de una pensión, o de una jubilación, porque el desequilibrio fuera tal, que no pudiese ser cubierto, los obreros serían los primeros partidarios de una modificación, que aún alterando una situación ya creada, les hubiese de asegurar, para el futuro, la tranquilidad personal de sus hogares y de su familia.

Estas leyes no crean situaciones definitivas e irrevocables, y pueden ser modificadas en favor o en contra de los derechos que ellas acuerdan; ello ha ocurrido en todas partes y es inevitable.

Para alcanzar esas soluciones que han de tender a establecer el equilibrio y la seguridad de la Caja, lo razonable es contar, no con la oposición o protesta de los que son beneficiados por la ley, sino al contrario, con el concurso de ellos.

El inciso que yo había insinuado, creyendo contar con el asentimiento del señor senador por Salta,...

Sr. Llanos. — Habría tenido el mayor gusto de coincidir con el señor senador.

Sr. Gallo. — ...no creo que entre el peligro que el señor senador ha creído encontrar, porque el propósito de él es establecer el principio de la inhibición del Estado y determinar las bases para fijar el *quantum*, cosa que el señor senador quiere hacer de inmediato sin tener los elementos suficientes de juicio para fijarlo desde ahora en una forma que comporte una previsión seria.

Al referirme a este nuevo inciso sostenía que podría ser una suma fijada establecida en

el presupuesto o una cantidad proporcional al monto de los servicios y contribución de las empresas, oportunamente fijada, con justicia y eficacia, contemplando la situación que hemos de tener reflejada más adelante, con todos los elementos de juicio indispensables y con los datos y con la experiencia que se adquiriera, no sólo con la aplicación de esta ley, sino también con la de ferroviarios, que ya está en movimiento. Entonces, pues, sería la oportunidad de llenar ese claro que hoy quedaría provisoriamente en la ley, en relación al monto, dentro de los conceptos enunciados.

Por esas razones, voy a mantener, en nombre de la comisión, ese artículo en la forma proyectada, y que, repito, no tiene los alcances ni entraña los peligros que el señor senador señala.

Sr. Llanos. — Yo acompañaré con mi voto al señor senador por la Capital, siempre que consintiera que se agregaran las siguientes palabras: "no pudiendo exceder del 2 % del monto de los sueldos de los empleados". Me parece que este agregado está dentro de las ideas manifestadas.

Sr. Linares. — Por mi parte, acepto.

Sr. Caballero. — Pido la palabra.

El concepto solidario que entrañan leyes como la que estamos discutiendo, obliga a aclarar la situación de los miembros de la comisión frente al concepto que ha expresado el señor senador por Salta. Todas estas leyes que se llaman de asistencia social, están basadas en la idea general de que los trabajadores de cualquier país, que hayan consagrado una gran parte de su vida, 25, 30 o 35 años de trabajo honrado, en obsequio de la colectividad social, tienen derecho a recibir de ella la seguridad de que los últimos años de su vida, ya imposibilitados para el trabajo, no los han de pasar en el desamparo y en el abandono.

Con este concepto consiguió el primer ministro Lloyd George, en Inglaterra, hacer pasar el proyecto sobre la renta. De manera que, cuando nosotros hemos agrupado estos gremios de servicios públicos, para beneficiarlos con este proyecto de ley, y cuando hemos prestado nuestro apoyo y nuestra contribución a la ley de jubilaciones ferroviarias, si bien lo hacíamos por el concepto de que son servicios evidentes, no hemos creído que esta circunstancia fuera lo suficiente para determinar de que sea una ley en exclusivo provecho de cualquiera de esos gremios; el pensamiento nuestro va más allá. Nosotros creemos que el Estado está en la obligación de amparar a toda persona que haya trabajado en obsequio de la subsistencia social durante un determinado número de años. Esa es nuestra doctrina general. Ahora, en particular, y tratándose de esta ley, es una felici-

dad para nosotros el que podamos ir resolviendo estos problemas — que han agitado a Europa y la agitan actualmente — en esta forma tranquila, prudente y razonable.

No nos oponemos—lo ha aclarado ya en su réplica el señor senador por la Capital — a las observaciones del señor senador por Salta, haciéndole justicia al decirle que ellas están destinadas a asegurar el desenvolvimiento económico de esta institución; pero creemos que a ese propósito basta la indicación contenida en el artículo 59, con el agregado que propone el señor senador Gallo, estableciendo que la contribución del Estado se fijará, después de un tiempo ilimitado en que funcione la Caja. Aceptar la indicación del señor senador Llanos, sería lo mismo que aceptar la del señor senador Linares, ya que están inspiradas en el mismo propósito.

Por estas razones, yo, como miembro de la comisión, voy a mantener el despacho de la misma, con la modificación del señor senador Gallo.

Señor Iturbe.—Pido la palabra.

Es de congratularse que, en principio, todos los señores senadores que han intervenido en este debate, coincidan con la idea madre del proyecto en discusión, en cuanto él establece la contribución del estado para satisfacer las necesidades a que pudiera quedar avocada la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los tranviarios y demás empleados y obreros que prestan servicios públicos. Y no es de extrañarse que haya esa coincidencia, puesto que se trata de la consagración de un concepto que ya está universalmente aceptado en la legislación de todos los países modernos. Casi fuera innecesario, pues, aducir mayores razones a las que han expuesto el presidente de la comisión y mi distinguido colega el señor senador por Santa Fe; pero quizá no esté de más recordar que, recientemente, en un país vecino al nuestro, en la República Oriental del Uruguay, se ha consagrado esos conceptos en términos precisos y categóricos. Un ilustrado parlamentarista de aquel país, informando un proyecto análogo al de que nos ocupa, decía, entre otras cosas, lo siguiente: “El Estado no puede dejar librado, exclusivamente, al esfuerzo de los trabajadores, el cumplimiento de esa obligación de orden moral de previsión, de asegurar el porvenir de la familia obrera, y no lo puede dejar, por una razón muy simple. El salario que el obrero recibe es un salario de necesidad, de estrechez, de miseria, de manera que dejar a los obreros, solos, que hagan su seguro, que se preparen para el día que les falte el trabajo, o que haya en ellos una verdadera incapacidad orgánica para el trabajo, es condenarlos, fatalmente, a morirse de hambre”.

Ahora bien, la dificultad surgida entre nosotros, consiste, simplemente, en la fijación del monto del aporte con que el Estado ha de contribuir al sostenimiento de la Caja de que se trata.

Se ha propuesto, concretamente, por el señor Senador por Santiago, el 2 o/o sobre el importe del sueldo de los jubilados o pensionados.

El señor Senador por Salta aceptó la fijación de ese monto, pero como ya se ha demostrado en el curso de esta discusión serena que estamos llevando a cabo, es materialmente imposible que desde luego se determine si el 2 o/o ha de ser suficiente o excesivo, quizá, para atender las necesidades de la Caja, en tanto que el temperamento propuesto por la comisión en atención a las observaciones formuladas por los señores senadores por Salta y Tucumán, concilian cualesquiera de las dificultades que pudieran suscitarse, puesto que esta ley no ha de entrar en ejecución sino al cabo de un determinado tiempo, o sea tres años, y puesto que en la misma se prevé que durante ese lapso de tiempo se han de llevar a cabo los estudios actuariales y el censo de empleados que determinarán una norma de conducta y una base positiva para poder señalar el verdadero importe de los gastos de la Caja. Me parece, pues, que lo prudente sería no anticipar de una manera precisa la fijación del aporte del Estado, sino dejarla supeeditada a lo que arrojen los resultados de los estudios a hacerse durante los tres años que la misma ley prevé. Por consiguiente, me complazco en ratificar las manifestaciones hechas por los dos distinguidos miembros de la comisión de legislación, en el sentido de que se incorpore un inciso en la parte pertinente de la ley, estableciéndose que oportunamente se fijará cuál ha de ser el monto del aporte del Estado para la formación del fondo de la Caja.

Nada más.

Sr. Llanos.—Pido la palabra.

Hay dos puntos fundamentales en los que estamos de acuerdo con los señores senadores que han usado de la palabra. El primero consiste en reconocer la necesidad de sancionar leyes de la naturaleza de la que se discute y, en segundo lugar, la necesidad también, de que el estado debe contribuir a asegurar el éxito de la misma. En lo que no estoy de acuerdo es en la situación del obrero a que ha hecho referencia el señor senador por Jujuy, porque creo que en este momento, en general, sobre todo la del obrero de esta Capital, es una situación holgada, de bienestar. Eso no quiere decir que por una ley no se le asegure una vejez tranquila, un retiro tranquilo, y el de su familia, cuando falte el jefe del hogar. Lo

que queremos tanto el señor senador por Santa Fe, como el que habla, es que se fije de antemano la porción con que debe contribuir el estado y al decir el 2 o/o que no puede exceder del 2 o/o del monto total del sueldo de los empleados, no quiere decir que se fije una suma determinada, sino que ese será el máximo y dentro de ese máximo, el estado contribuirá con lo que sea necesario.

Nada más.

Sr. Linares.—Pido la palabra.

Yo pienso, señor presidente, como lo acaba de manifestar el señor senador por Santiago del Estero, que la situación de los obreros en el país no es tan angustiosa como la han presentado los señores senadores por la capital, Santa Fe y Jujuy. No se puede decir eso de un país que presenta tantísimos ejemplos de inmigrantes que han levantado colosales fortunas con su trabajo personal, merced a la constancia, al espíritu de ahorro, a la moralidad, de que estaban dotados. En todas partes y a cada momento vemos surgir fortunas de la clase obrera, sea nacional o extranjera. Prosperan los que tienen aquellas condiciones. Desgraciadamente son los menos. Los demás viven pobres y sufren las eventualidades de las épocas malas y escasas, o las miserias de que cortejan siempre a la ineducación o al decaimiento de las fuerzas. A estos debe ayudar el estado cumpliendo uno de los fines primordiales de su institución.

Creo, como el señor senador por Santa Fe, que todos los obreros pobres son dignos de la asistencia social cuando se encuentren en la imposibilidad de trabajar, algo más: que todo ente humano es digno de protección: pero, para ser lógicos, debemos encarar y resolver el problema en toda su amplitud, con las grandes exigencias que comporta: y ante ellas, determinar en qué forma y medida ha de darse la asistencia social.

Desde luego, es innegable, señor presidente, que si se tratara de dar jubilación a todos los obreros y a todos los hombres que la necesitan, no podría hacerse en los términos de este proyecto de ley, pues no se puede admitir que un hombre de 50 años, que está en todo su vigor, a la edad en que ha adquirido experiencia y conocimientos superiores para dedicarlos a la industria en que trabaja, deba retirarse a su casa a cruzarse de brazos, gozando del sueldo íntegro, pagado en parte por el estado. Y esto no se puede admitir, porque, entonces, medio mundo viviría a costa de los que trabajan y luchan por la vida cumpliendo su dura ley. Las jubilaciones serían tantas y tan extensas, que vendrían a

recargar de una manera agobiante a todos los que no se encuentren comprendidos en el beneficio. A ello podemos llegar fácilmente por el camino que vamos. Estas jubilaciones son, sin duda, de privilegio, concedidas dentro de términos tan amplios y generosos que jamás podrían concederse a todos los obreros del país, sin arruinar el Tesoro y las fuentes de producción.

Yo estoy conforme con que los obreros gocen de los beneficios que les dan las leyes de alta previsión, mediante el aporte proporcional de ellos, de las empresas y del público, que es precisamente quien va a pagar en este caso, puesto que en la misma ley se establece que se subirá el precio de los servicios; pero no que vengan a entorpecer o cegar las fuentes de la producción con cargas desproporcionadas y agotantes, como habría que establecer en aquel caso. Dentro del razonamiento del señor Senador por Jujuy, que me parece lógico y concluyente, debemos terminar en lo siguiente: que si dentro de tres años recién se hará el reparto, porque a los tres años recién se habrá hecho el censo y el estudio que nos hará conocer la importancia efectiva de los recursos, deberíamos esperar ese momento para hacer la fijación del beneficio que corresponda acordar, porque entonces se sabría lo hay para hacer frente a las erogaciones. Lo contrario es proceder con un criterio evasivo o engañoso, con el que no coincide.

Para no alargar más el debate, no haré más consideraciones al insistir en las proposiciones que había formulado.

Sr. Gallo. — Pediría que se leyera la proposición formulada por la comisión.

Sr. Llanos. — Que se lea la última parte del agregado propuesto por mí.

Sr. Linares. — Al cual me adhiero.

Sr. Presidente (Villanueva). — El señor Senador acepta el artículo propuesto por el señor Senador por Santiago del Estero, ¿y la comisión?

Sr. Gallo. — El agregado, no, porque no sabemos lo que puede significar, o si es excesivo.

Sr. Llanos. — Excesivo, no...

Sr. Presidente (Villanueva). — Se va a votar entonces el artículo 35. ¿El señor Senador lo propone como párrafo A?

Sr. Caballero. — Como inciso K.

Sr. Presidente (Villanueva). — Muy bien. Todo el resto del artículo, queda aprobado.

Se va a votar, primeramente, sin el agregado del señor Senador por Santiago del Estero.

Sr. Linares. — Modifico mi moción en el

misimo sentido del señor Senador por Santiago.

Sr. Presidente (Villanueva). — Se va a votar sin el agregado.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Villanueva). — Ahora se va a votar el agregado propuesto por el señor Senador por Santiago del Estero.

Sr. Secretario (Ocampo). — No pudiendo exceder del 2 o/o del monto total del sueldo del empleado beneficiado por esta ley.

—Se vota y resulta negativa.

—Se votan y aprueban los artículos 36,

37, 38, 39, 40, 41 y 42.

Sr. Presidente (Villanueva). — Se continuará tratando el capítulo 2.o

—Se lee el artículo 6o.

—Aprobado.

—Se lee el artículo 7o.

Sr. Presidente (Villanueva). — Está en discusión.

Sr. Zabala. — Pido la palabra.

Desearía saber si el inc. 1o. del artículo 7, se exige la edad de cincuenta años, tanto para la mujer como para el hombre.

Sr. Gallo. — Pido la palabra.

La comisión ha contemplado este caso especial, referente a las obreras y empleadas, con motivo de una solicitud formulada por un grupo de ellas y de una presentación hecha al H. Senado por la Unión Popular Católica. Tanto en una, como en otra, se ha pedido la exclusión de la edad como un factor concurrente para la adjudicación de las jubilaciones.

La Comisión declara que ha encontrado en principio fundada la observación, en el sentido de que no puede medirse con el mismo criterio el trabajo del hombre que el de la mujer, y que habría justicia, en la limitación del número de años de edad o en la limitación del número de años de servicios, para la jubilación, ya que la mujer tiene una resistencia física y una capacidad de trabajo inferior a la del hombre.

No ha incorporado expresamente una disposición que consagre esta excepción, porque se proponía agregar en el artículo 6o una disposición especial que contemple este caso para el futuro. En ese artículo 6o, se dispone que la caja mandará practicar una clasificación del personal de los diferentes servicios públicos en relación a la naturaleza de sus funciones o tra-

bajos, para determinar las condiciones de preferencia o excepción que, por razón de edad o de años de trabajo, correspondiera establecer. Este artículo ha sido proyectado con el concepto que ya expresé en su oportunidad, de que convenía establecer algunas situaciones de excepción, determinadas por la naturaleza especial del trabajo que se presta, que expone más frecuentemente y con mayor intensidad a peligros y a molestias que ponen acaso en juego la salud y la vida misma de los empleados. La comisión se proponía agregar en este artículo la palabra "sexo", a efecto de que en el estudio que se practique, se contemple también ese factor sexo como fundamento para establecer oportunamente la excepción que corresponda.

No es posible hoy establecer lo que significaría la consignación expresa en la ley y en relación al funcionamiento de la caja, de una excepción en favor de empleadas obreras, contemplando los dos requisitos de años de servicio y de edad, o solo uno, y ha creído que sería más prudente esperar los resultados de ese informe para establecer la excepción reconociendo que en principio, sería justo consignar una diferencia en su favor, ya sea limitando la edad en que puede jubilarse, o bien sea limitando los años de servicios, según sea la ocupación.

Sr. Zabala. — No tengo nada que observar, después de las explicaciones que ha dado el señor miembro informante.

Sr. Presidente (Villanueva). — Si no tiene nada que observar el señor senador, queda aprobado el artículo 6o.

—Sin observación se aprueban igualmente desde el artículo 7o. hasta el 31.

—Al leerse el artículo 32 dice el:

Sr. Presidente (Villanueva). — En este artículo hay un error. En la parte que dice "establecido en el artículo 20" debe decir "establecido en el art. 62"

Sr. Melo. — En el art. 29 hay otro error.

Sr. Presidente (Villanueva). — Está corregido.

—Se aprueban igualmente sin observación desde los artículos 32 hasta el 34.

Sr. Presidente (Villanueva). — Se va a pasar al capítulo 5o.

Sr. Llanos. — Pido la palabra.

El artículo 42 establece que la junta de administración estará a cargo de un directorio, formado por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Se-

nado, un representante de las empresas y otro de los empleados y obreros de cada uno de los servicios públicos comprendidos en esta ley. El número de servicios comprendidos en esta ley son ocho y de los términos de esta primera parte del artículo 42, parecería deducirse — y en esto necesito una explicación de la Comisión de Legislación — que el gobierno tendrá sólo un representante, los gremios otro y los obreros ocho.

Si este fuera el alcance del artículo que está en discusión, me opondré a su sanción.

Sr. Gallo. — Pido la palabra.

No es ese el concepto de la ley. El propósito de ella es dar en la Caja igual representación a las empresas y obreros, de tal manera que ha de entenderse que ese término “cada uno de los servicios públicos comprendidos en esta ley”, comprenda a las empresas y a los empleados y obreros de las mismas.

En el párrafo tercero de este mismo artículo, se ha hecho una clasificación de cuáles son los servicios que se consideran distintos, clasificación que se ha hecho a efecto de limitar la composición de la Caja administradora y tomando por base la similitud de los servicios públicos prestados por las distintas empresas; de tal manera que, siendo ocho los servicios públicos, en realidad la ley los considera como si fueran cuatro, que son los siguientes: Primero, tranvías; segundo, teléfonos, telégrafos y radiotelegrafía; tercero, gas y electricidad; cuarto, aguas corrientes y servicios sanitarios. La Comisión entiende que cada grupo de estas empresas debe tener un representante, como cada grupo que depende de estas empresas ha de tener también el suyo.

Sr. Llanos. — Entonces, ¿de cuántos miembros contaría?

Sr. Gallo. — De cuatro, por las empresas y cuatro por los empleados, además del Presidente.

Sr. Llanos. — Si ese es el alcance, no tengo inconveniente en votarlo.

Sr. Presidente (Villanueva). — Queda aprobado el artículo 42.

—El artículo 43 es igualmente aprobado.

—Se lee el 44.

Sr. Presidente (Villanueva). — Al final de este artículo hay que hacer una modificación.

Sr. Gallo. — Hay que suprimir las últimas palabras.

Sr. Presidente (Villanueva). — ¿Cuáles son, señor senador?

Sr. Gallo. — Hay que suprimir esas palabras como consecuencia de la sanción anterior de

acuerdo con la indicación del señor senador por Tucumán, que son las siguientes: “Cuando los recursos calculados no alcancen a cubrir el importe total de las jubilaciones y pensiones que deberán ser satisfechas durante el año, la Nación contribuirá con la diferencia”.

Sr. Presidente (Villanueva). — Queda aprobado el artículo 44, con excepción del último párrafo, a que acaba de hacer referencia el señor senador por la Capital.

—Se leen y aprueban los artículos 45 y 46.

Sr. Presidente (Villanueva). — Se pasará al capítulo 6o., disposiciones generales.

—Se lee y aprueba el artículo 47.

—Se aprueban, sin observación, los artículos del 48 al 53 (inclusive).

—Al considerarse el 54, dice el

Sr. Esteves. — Pido la palabra.

El segundo párrafo de este artículo, que comprende a los que tienen derecho de jubilación, dice:

“A los actuales empleados y obreros de las empresas de servicios públicos comprendidas en esta ley, se les computarán también los servicios prestados con anterioridad en las distintas ramas de la administración nacional o de la municipalidad de la capital federal y en las dependencias de las empresas ferroviarias.

En uno y otro caso, el cómputo se hará sin bonificación de tiempo.”

Tengo que hacer una pregunta a la comisión: Aquellos que pasan de una empresa a otra y han contribuido a la formación de las Cajas respectivas, tanto de la Municipalidad como de las empresas ferroviarias, los capitales que ellos han entregado, ¿se tiene en cuenta en la nueva empresa donde van a prestar sus servicios?

Sr. Gallo. — Sí, señor senador. Están comprendidos.

—Se aprueba los artículos 54, 55, 56 y 57.

—En discusión el artículo 58.

Sr. Esteves. — Voy hacer esta nueva pregunta a la Comisión. Dice este artículo:

“A los efectos de la contribución de las empresas, quedan estas autorizadas para aumentar sus tarifas en la proporción necesaria a satisfacer el aporte que respectivamente les corresponda.”

Supongo que las empresas tienen un cálculo determinado de un interés sobre el capital que ellas tiene invertido el 6 o/o, por ejemplo, y que, mientras reditue a su capital ese inte-

rés del 6 o/o, no tendrán derecho a aumentar la tarifa, ¿o es sin límite esta facultad que se les da para aumentar las tarifas?

Sr. Gallo. — Esta facultad para aumentar las tarifas se refiere, desde luego, a las empresas que dependen directamente de la Nación. A las que dependen de otra jurisdicción, la facultad les servirá de base o antecedente para gestionar de las respectivas autoridades, la determinación del monto en qua ha de consistir el aumento de las tarifas teniendo en cuenta los distintos servicios, y como una condición para que les sean obligatorias las sanciones consignadas en el proyecto. Pero la comisión no ha hecho excepciones contemplando la situación diferente que pueda tener cada empresa en relación a sus rendimientos y a la proposición de éstos respecto de sus capitales.

Sr. Esteves. — ¿Pero no hay un límite, más o menos, al rendimiento, por ejemplo, del 8, 10 o 12 por ciento? ¿No hay derecho a limitar eso?

Sr. Gallo. — No hay; por los datos que tiene la comisión, ninguna empresa ha llegado al límite del rendimiento...

Sr. Esteves. — ¿No hay límites a los rendimientos? Y hay algunas tan prósperas. Porque esa facultad de aumentar tarifas, recae sobre el público.

Sr. Gallo. — Como antecedente, diré, que el caso más discutido ha sido el de las empresas de tranvías, las cuales han tenido que hacer una exhibición completa de sus libros de contabilidad y pasar por el control prolijo del Concejo Deliberante, comprobando relativamente sus escasos rendimientos para obtener la autorización necesaria a los efectos de elevar las tarifas con destino a la formación de estos fondos y con reserva del derecho de la Municipalidad, de revisar esa autorización en el transeurso de tres años. Sin embargo, los tranvías son las empresas, aparentemente de más prosperidad, dentro de las similares que prestan servicios públicos.

Sr. Esteves. — ¿Pero no hay un límite?

Sr. Gallo. — No hay límite.

Sr. Esteves. — Yo creo que se podría fijar el 6 o/o.

Sr. Melo. — Yo participo de las opiniones del señor Senador por Tucumán y aplaudo con todo entusiasmo esta ley y lamento que ella no se extienda a todos los empleados de comercio como los de Bancos y de servicios, como los de puertos, pero considero que es peligroso dar una autorización indeterminada como la que envuelve el artículo 58, a las empresas para que aumenten sus tarifas en la "propor-

ción necesaria" y como dice este artículo, para satisfacer el aporte que les corresponde, cabe preguntar: ¿Quién ha de ser el juez de esa proporción? ¿Hasta dónde las empresas van a poder aumentar sus tarifas? Es necesario tener en cuenta esto porque afectan al público. Todos los aumentos de tarifas y esta es una faz de la cuestión que no debe olvidarse.

Sr. Gallo. — Pido la palabra.

Esta disposición, es igual o semejante a la que consagra la ley de jubilaciones ferroviarias. En realidad puede decirse que ella constituye casi una base para financiación de la Caja, en cuanto sobre ella reposa la plena conformidad de las empresas, a los efectos de la formación del fondo y de todas las facilidades otorgadas, evitando el peligro de disenciones ulteriores que demorarán su aplicación.

Fijar un límite de interés, resulta un poco peligroso en asuntos de esta índole. La ley todo lo que puede hacer es establecer el monto, desde que el aporte de las empresas va a ser igual al 8 o/o del sueldo de sus empleados, de tal manera, que las empresas tienen un máximo, pasado el cual, el aumento de las tarifas no puede hacerse; sólo podrán elevarlas hasta la suma necesaria para cubrir ese aporte que el Estado les exige para contribuir a la formación de la Caja. Ese aporte tiene que ser independiente del interés que ella pueda obtener por la inversión de su capital, ya que el control de ese interés tendrá que ser sumamente difícil y peligroso y expuesto a errores y a que se cometan injusticias, desequilibrando, además, una de las bases fundamentales de la ley.

Sr. Esteves. — Pido la palabra.

Yo creo que no hay peligro en fijar un límite, al contrario, es una garantía, porque toda concesión en una forma ilimitada es un peligro para el público. En las empresas ferroviarias, ha sucedido lo mismo. Una ley de concesión, que permita que aumenten los pasajes y costos de las cargas, de manera que ella no contribuya con nada, es una de las grandes iniquidades, que tiene, a mi modo de ver, esa ley ferroviaria. Es el público el que tiene que pagar, y de ahí resulta que, desde el interior, no se pueden transportar mercaderías, ni nada, porque se dice que las empresas aumentarán sus tarifas.

En estas otras empresas de servicios más limitados, debe establecerse un límite y me parece que el 6 o/o es un interés conveniente.

Sr. Melo. — A lo que ha expresado el señor Senador por Tucumán, se agrega todavía lo siguiente: que tratándose de las tarifas ferroviarias, cuando se discutía el proyecto de jubilación de los ferroviarios, quedó establecido que las disposiciones de esa ley no importaban alte-

rar el régimen, en lo tocante a tarifas o sea, que no quedara librado a la exclusiva voluntad de las empresas aumentar las tarifas y siempre el aumento de ellas estaba subordinado a las normas generales administrativas, mientras que en ésta quedan las empresas autorizadas para aumentar las tarifas y se prescinde por completo de lo que estipule la concesión y de las autoridades que deben intervenir para sancionar todo aumento de tarifas.

Me parece por ello, que no es posible votar este artículo en la forma proyectada, que no lleva límite, en lo tocante al aumento, ni siquiera lo somete al control de la autoridad que otorga la concesión.

Por otra parte, los reparos que formulo, no pueden afectar a las empresas de tranvías, ni a las otras empresas a cuyos empleados se refiere la ley, desde que, en realidad, no se trata de una gran concesión o de un gran sacrificio para ellas, si tenemos en cuenta que la jubilación de empleados se está extendiendo en el comercio y en condiciones más liberales, con mayor contribución de parte de los capitalistas que la que les impone esta ley a las empresas. La droguería "La Estrella", por ejemplo, ha formado una caja de jubilaciones para sus empleados, sin exigirles ningún aporte, y la Compañía General de Fósforos ha hecho lo mismo. De manera que las empresas pueden organizar la caja sin recurrir a un procedimiento que, en definitiva, como lo expresaba el señor Senador por Tucumán, se traducirá en que hagan gravitar sobre el público la cooperación y el aporte que ellas tengan que hacer para formar la caja, lo que no es justo ni razonable.

Sr. Gallo.—Pido la palabra.

Dije en su oportunidad que la comisión había llamado a su seno a los directores y gerentes de las empresas a cuyo personal afectan las disposiciones de esta ley. Lo hizo porque creyó que debía procurar soluciones que evitaran dificultades para el futuro, armonizando los intereses de ellas y el de los beneficiados; lo hizo también, porque entre los antecedentes que la comisión encontró en su carpeta, figuraban presentaciones de las dos empresas de tranvías, Anglo Argentina y Lacroze, las cuales hacían presente la imposibilidad de aceptar el proyecto tal como lo sancionara la Cámara de Diputados, sin que se les autorizara a elevar sus tarifas en una forma proporcional al aporte que se les obligaba a hacer para el fondo de la caja que crea esta ley.

La presentación de las empresas coincidió con la gestión realizada ante el Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital, para que se les autorizara a elevar esas tarifas. Esa auto-

rización les fué acordada después de un prolijo estudio, bien controlado en los libros y contabilidad de aquellas dos empresas y del cual resultó que, efectivamente, ellas no podían hacer frente al aporte exigido como contribución, sin que se les autorizara a elevar su tarifa. De ahí vino la ordenanza sancionada en marzo de este año. Se reconoció, pues, por el Concejo Deliberante, después de un amplio debate, la necesidad que tenían las empresas para aumentar las tarifas, si se les exigía el aporte que se les asignaba para poder formar la Caja.

Otras empresas han hecho en el seno de la Comisión iguales manifestaciones y alguna ha llegado hasta expresar que ni con la autorización del aumento de las tarifas podría estar en condiciones de realizar ese aporte, por ser una cooperativa.

El proyecto generaliza pues, la situación consagrada ya por ordenanza, con relación a las dos grandes empresas de tranvías de la Capital, para hacerla extensiva en sus conclusiones a las demás empresas de servicios públicos. Quizás pudiera decir lo mismo de la empresa de gas, que ha tenido que gestionar y ha obtenido de la Municipalidad una modificación en su concesión que comprende el permiso para aumentar sus tarifas, frente a los resultados a que llegaba la explotación industrial de gas en la Capital Federal.

Si esta autorización no se concede, o se la otorga limitándola dentro de un tipo determinado de interés me temo por la suerte de esta Caja y me temo también que ella no se desenvuelva en las condiciones cómodas y seguras que es el deseo, debo presumirlo de los señores senadores; temo que surjan dificultades y cuestiones como aquellas que se presentaron cuando se trató la jubilación de los ferroviarios: la resistencia de las empresas por un lado y la exigencia de las autoridades públicas, por el otro, dificultades que se solucionaron autorizando a las empresas a que aumentaran las tarifas, dentro de un alto y amplio espíritu de gobierno, que, sin sacrificar la prerrogativas de la autoridad buscó fórmulas de armonía y de solución inmediata.

Insisto, pues, en que se comprometería fundamentalmente este proyecto de ley, sino se estableciera esta autorización en los términos en que está consignado en el artículo en discusión, o en otros semejantes que salven algunos de los escrúpulos u observaciones que se han formulado.

Sr. Estevez.—Ni el público, ni el congreso jamás podrían autorizar un artículo que obligara a estas empresas, cuyos servicios están reconocidos por todo el mundo, a ir a una si-

tuación de quiebra, pero tampoco, puede éste mismo congreso darles una patente para que ellas eleven las tarifas cuando lo consideran oportuno.

Sr. Caballero. — No hay tal patente porque está limitada la cantidad.

Sr. Esteves. — ¿A cuánto se limita?

Sr. Caballero. — A lo que la empresa necesite para cubrir este 2 o/o.

Sr. Esteves. — Eso debe saberse, porque es deber de las empresas.

Sr. Caballero. — No puede aumentar sus tarifas sino en un 8 o/o.

Sr. Esteves. — Es decir que no exceda al 8 por ciento. . .

Sr. Llanos. — Con el pretexto de contribuir a la caja, las empresas no sólo aumentan las tarifas, sino que cambian la categoría de las mercaderías.

Sr. Linares. — Yo desearía saber, para determinar mi juicio en esta emergencia, cuál es la situación de las empresas con respecto a su tasa de interés.

¿El señor miembro informante de la comisión, doctor Gallo, podría informarme? Tengo entendido que por sus concesiones, las empresas, después de un número determinado de años de explotación, entregan a la municipalidad todas sus líneas, instalaciones, etc. ¿No son concesiones a perpetuidad, no es así?

Sr. Gallo. — No señor; no son a perpetuidad algunas de las concesiones de servicios a que se refiere la ley.

Sr. Linares. — De modo que las líneas pasan a poder de la municipalidad, y, en estas condiciones, creo que no puede fijarse una tasa de interés; la fijación de una tasa de interés se explica en los ferrocarriles que son concesiones a perpetuidad, y en estas, el dividendo que excede del 6 o/o viene a servir de índice para la intervención del gobierno en la fijación de sus tarifas; pero, tratándose de empresas que tienen un tiempo limitado de explotación, el 6 o/o sería un interés relativamente muy bajo. Y tengo entendido, también, que en las concesiones se establece un límite preciso para los pasajes de los tranvías, pero no para el monto de las rentas de las empresas.

Yo creo que está bien proyectado en la forma que lo hace la comisión, sobre la contribución de las empresas, siempre que se agregue lo que el señor senador por Entre Ríos, proponía: “que ha de ser con la aprobación de la municipalidad . . .”

Sr. Caballero. — Y que hemos aceptado.

Sr. Llanos. — De esta manera las empresas no contribuyen directamente; pero hay que reco-

nocer que lo hacen indirectamente, porque su negocio se afecta afectando la intensidad del tráfico, que, sin duda, disminuye con todo aumento de tarifas.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Concretando mi observación presento como redacción del artículo 58, la siguiente:

“A los efectos de la contribución de las empresas, quedan estas facultadas para aumentar sus tarifas en la proporción necesaria a satisfacer el aporte que respectivamente les corresponda, previa aprobación de la autoridad que otorgó la concesión y a quien compete ejercer el control de las tarifas”.

Varios señores senadores. — Muy bien.

Sr. Gallo. — La Comisión acepta.

Sr. Linares. — Esta disposición me suscita una duda que desearía que el señor senador por la Capital me la aclarará. Me parece que muchas de estas empresas comprendidas en el proyecto que discutimos, tienen contratos con casas de comercio, con establecimientos industriales, sobre los servicios que suministran. ¿Cómo quedaría la situación de estos contratos con la aplicación de esta ley? ¿Podrían ellas, en cada contrato, subir el precio de los suministros que hacen? Porque ya no se trataría de servicios que pueden encarecerse con intervención de la Municipalidad; se trataría de situaciones hechas, creadas entre partes. . .

Sr. Esteves. — Se atenderán a los contratos, a sus estipulaciones.

Sr. Linares. — ¿Pero quién pagará? Me parece que es conveniente decirlo claramente, para no crear así conflictos inútiles.

Sr. Llanos. — A mí me parece que el punto debe solucionarse de acuerdo con las disposiciones del Código Civil y, por consiguiente, las modificaciones introducidas por esta ley deben ser acatadas o aceptadas.

Sr. Gallo. — Pido la palabra.

En realidad, señor presidente, de todos los informes que tiene la comisión, acaso las únicas empresas que pudieran estar afectadas por esta disposición, son la Compañía Alemana Transatlántica y la Italo Argentina de Electricidad, en cuanto ellas tienen hechos contratos para la provisión de fuerza o de luz, en unos casos con particulares y en otros con empresas de servicios públicos también; pero esos contratos son de corta duración, están próximos a vencer en su mayoría.

Las empresas han señalado la situación en que se encuentran, que las colocaría en condición un tanto más desventajosas que las otras que no tienen esa limitación por los contratos; pero, en realidad, sin hacer mayor hincapié o cuestión sobre este artículo, de lo cual la co-

misión ha deducido que no debe ser de gran trascendencia en sus resultados prácticos la aplicación del artículo íntegramente, o que se reservan el derecho de plantear el caso judicialmente con los terceros contratantes.

Sr. Linares. — A pesar de todo, queda siempre la duda a quién corresponde soportar esta contribución.

Por el Código Civil correspondería al que presta los servicios o sea a las empresas; pero por el espíritu de esta ley se vé claramente que se quiere hacer gravitar sobre el público, desde que se autoriza a subir todas las tarifas que el público paga.

Sr. Gallo. — Va a quedar siempre una situación a discutirse entre las empresas y los particulares.

Sr. Linares. — Podría establecerse para los contratos pendientes cual será el efecto de la nueva ley.

Sr. Llanos. — Por eso decía que la solución deberá quedar sometida a las disposiciones del Código Civil.

Sr. Linares. — Se suscitara muchos pleitos, que pueden evitarse.

Sr. Esteves. — Mejor, para los abogados! (Risas).

Sr. Presidente (Villanueva). — ¿La comisión acepta?

Sr. Gallo. — La comisión ha aceptado el agregado propuesto por el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Presidente (Villanueva). — Se va a leer por secretaría en la forma que ha quedado redactado el artículo.

Sr. Secretario (Labougle). — (Leyendo): El artículo quedaría así: "A los efectos de la contribución de las empresas, quedan estas facultades para aumentar sus tarifas en la proporción necesaria a satisfacer el aporte que respectivamente le corresponda, previa aprobación de la autoridad que otorgó la concesión, o quien pueda ejercer el contralor de las tarifas".

Sr. Presidente (Villanueva). — Se va a votar.

—Se vota en esa forma el artículo y queda aprobado.

—Se lee y aprueba el artículo 59 y al leerse el 60 dice el

Sr. Gallo. — Habría que hacer un agregado de acuerdo con la pregunta que formuló el señor senador Zabala, después de las palabras: "por razón de edad, sexo o años de trabajo".

Sr. Presidente (Villanueva). — Está en la mitad del artículo.

Se va a votar con la modificación propuesta por el señor senador por Entre Ríos.

—Se vota en esa forma, y se aprueba.

—Se lee artículo 62.

Sr. Esteves. — Pido la palabra.

Voy a hacer una pregunta.

Las votaciones que se hagan para conceder las jubilaciones, pensiones y subsidios, que ha de acordar el Directorio de la Caja, ¿serán por simple mayoría o por dos tercios?

Sr. Gallo. — Por mayoría.

Sr. Esteves. — Puede dejarse esto aclarado, por que, de lo contrario, el directorio se podría reunir, por ejemplo, sin la presencia de los delegados de los obreros; y como se reúnen en mayoría, forman directorio sin que los obreros tengan participación. Así se evitaría que se concediese una pensión con la cuál no estuviesen ellos de acuerdo.

Sr. Caballero. — Puede proponer ese agregado el señor senador.

Sr. Esteves. — Sí, señor.

Sr. Presidente (Villanueva). — ¿Acepta la comisión el agregado propuesto por el señor senador por Tucumán?

Sr. Gallo. — Sí señor presidente.

Sr. Presidente (Villanueva). — Con el agregado propuesto por el señor senador queda aprobado el artículo.

—Se lee el artículo 63, se aprueba, y dice el

Sr. García. — Pido la palabra.

Es para hacer una pregunta al señor miembro informante de la comisión. Yo me he mantenido en silencio durante la discusión, de acuerdo con el asentimiento tácito, durante toda la discusión de la ley, que me parece que hay de no tocar algunos detalles.

Yo he votado la ley de pensiones ferroviarias en su oportunidad, sin perjuicio de declarar, que yo la aceptaba, en tanto que esa ley garantizara la estabilidad del servicio ferroviario, que las exigencias del público reclamara. Por esa razón voté el aporte del fisco a la referida ley. Yo quiero ahora preguntar, aunque comprendo que ésta es una cuestión grave, al señor miembro informante de la comisión, si se otorgarán los beneficios de esta ley a los promotores de huelga. Pienso que no se les debe otorgar.

Para mí lo fundamental, es que el servicio público tenga la estabilidad necesaria que reclaman las exigencias de la vida social, y que se aleje toda perturbación que pueda interrumpirle, Esa es mi pregunta.

Sr. Gallo. — Pido la palabra.

Entre los beneficios que en nombre de la comisión he atribuido a esta ley, figura, y creo haberlo dicho, el de la más severa disciplina dentro del personal y de la mayor eficiencia en la prestación del servicio público. Creo que estas leyes actúan como una gran fuerza moral, aquietando los espíritus, estimulando la labor y haciendo que cada uno ponga en el esfuerzo de todos los días un sentimiento mayor de justicia y de mayor respeto. A esa consideración de orden moral derivada del efecto pacificador y de garantía que estas leyes ofrecen al personal de servicios públicos, han de agregarse, seguramente, en su hora, disposiciones de otra índole que contemplen el peligro de que se produzca alguna de las situaciones a que el señor senador por Buenos Aires se ha referido.

No creo que sea en el texto de esas mismas leyes de jubilaciones y de pensiones, que corresponda establecer la sanción penal, disciplinaria y represiva contra los autores de huelgas, o contra los que destruyan el material empleado en los servicios públicos impidiendo su funcionamiento. Creo que eso corresponde, por su naturaleza, a otro orden de legislación referente al trabajo mismo y a la represión de todo aquello que importe un atentado contra la libertad de trabajo, o contra el regular funcionamiento de los servicios públicos. En su hora, yo habré de acompañar al señor senador por Buenos Aires a contemplar con amplio espíritu las medidas que el Congreso ha de considerar, sin duda, para llegar a ese fin, armonizando los tres intereses que están en juego: el del obrero, el de las empresas y el más fundamental, el interés de la sociedad, para la cual se han establecido estos servicios.

Sr. García. — Pido la palabra.

Estoy de acuerdo con las manifestaciones del señor senador por la Capital, menos en la que se refiere al aporte del fisco en una suma considerable, puesto que si él ha de contribuir en tan gran escala, es justo que se exija la equivalencia, es decir, que pierdan los huelguis-

tas los beneficios que esta ley les acuerda. Es de desear que llegue felizmente la hora que anuncia el señor senador por la Capital, pero aquí se trata de un caso positivo, como es el aporte del fisco, considero que debe negársele al que interrumpa la libertad de trabajo. Por mi parte, creo que la hora ha llegado y que es en este momento que debe tratarse seriamente el asunto, pero como parece que hay un tácito acuerdo en pasar como sobre ascuas por esto que es fundamental, votaré la ley salvando mi opinión en este caso, como lo he hecho en análogas circunstancias.

Nada más.

Sr. Presidente (Villanueva). — Queda aprobado el artículo 63. El 64 es de forma.

Queda sancionado el proyecto.

—La barra prorrumpe en grandes aplausos al señor presidente, doctor Villanueva, al señor senador Gallo y al Senado Argentino.

Sr. Presidente (Villanueva). — Se va a tratar el proyecto de Código Penal, según la moción del señor senador del Valle Iberlucea.

Sr. del Valle Iberlucea. — Hay que tratarlo en general.

Sr. Presidente (Villanueva). — Está en discusión.

Sr. Esteves. — Voy a completar la moción del señor senador por la Capital: que se vote en general y se deje la discusión en particular para otro día de sesión, acabando hoy con esta orden del día...

Sr. Llanos. — Hago moción para que pasemos a un breve cuarto intermedio.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Villanueva). — Habiendo asentimiento, invito a la Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio.

—Así se hace siendo las 18 y 45.

CARLOS A. CARRANZA.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.